



# Asamblea General

Distr. general  
14 de febrero de 2020  
Español  
Original: inglés

---

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019

#### Opinión núm. 82/2019, relativa a Waleed Antoine Moubarak (Kuwait)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 22 de febrero de 2019 al Gobierno de Kuwait una comunicación relativa a Waleed Antoine Moubarak. El Gobierno respondió a la comunicación el 21 de mayo de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
  - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
  - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
  - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);
  - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

##### a) Contexto

4. Waleed Antoine Moubarak tiene doble nacionalidad del Canadá y del Líbano, y nació el 26 de abril de 1970. El Sr. Moubarak es residente habitual de Al-Salmiya (Kuwait). Tiene pasaportes expedidos por el Canadá y el Líbano.

5. A partir de abril de 2006, el Sr. Moubarak prestó servicios como director jurídico de un gran conglomerado privado (“la empresa”). Según se informa, a resultas de una desavenencia con el hijo del propietario de la empresa, el Sr. Moubarak fue despedido en diciembre de 2017, tras lo cual abandonó Kuwait. Regresó el 3 de abril de 2018, aproximadamente a las 13.00 horas. Entró en Kuwait sin ningún problema y fue recogido por un chófer de la empresa, que lo llevó a su apartamento, igualmente proporcionado por la empresa. Se le pidió que entregara su pasaporte canadiense para que la empresa pudiera, como cortesía, renovar su permiso de residencia. El Sr. Moubarak entregó su pasaporte canadiense al representante de la empresa y, según se informa, nunca se le devolvió.

##### b) Detención

6. Según la fuente, el 3 de abril de 2018, el Sr. Moubarak entró en su apartamento y después salió aproximadamente a las 15.30 horas, momento en el que fue detenido en la calle, directamente delante de su residencia, por varios agentes del Departamento de Investigación Criminal. Estos lo esposaron por la fuerza y lo llevaron a la comisaría de Al-Shuwaij, sin informarle en ningún momento del motivo de su detención. Le incautaron sus tres teléfonos móviles y su cartera, tarjetas de crédito y documentos de identidad. En el momento en que se presentó la comunicación de la fuente, no se había devuelto ninguno de estos artículos ni, en contra de lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 17 de 1960), se había elaborado una relación de los objetos incautados.

7. La fuente informa de que unas horas más tarde, aproximadamente diez agentes del Departamento de Investigación Criminal llevaron de nuevo al Sr. Moubarak a su apartamento, esposado. Por lo que él sabe, estos agentes no tenían una orden y, en lugar de solicitarle permiso para entrar en el apartamento, lo hicieron por la fuerza. Se incautaron de objetos electrónicos personales, como computadoras portátiles (cuyas contraseñas le obligaron a proporcionar), y carpetas de documentos personales. No elaboraron una lista de los objetos que confiscaron ni entregaron un recibo por los objetos que se llevaron. En ningún momento se mostró al Sr. Moubarak una orden de registro.

8. Entonces, según la fuente, el Sr. Moubarak fue llevado de nuevo a la comisaría de policía de Al-Shuwaij, donde los agentes de policía le mostraron dos cigarrillos que contenían cánnabis y que afirmaban haber encontrado en su apartamento. También le mostraron bebidas alcohólicas, que dijeron haber encontrado en una habitación de su apartamento utilizada como almacén. Supuestamente lo amenazaron con infligirle violencia personal, le negaron su derecho a un abogado y le exigieron que admitiera la posesión de las bebidas alcohólicas y el cánnabis.

9. La fuente informa de que los hechos alegados constituyen delitos leves. Sin embargo, la policía preguntó más tarde sobre unas acusaciones de malversación de fondos, aparentemente hechas por la empresa contra el Sr. Moubarak. Este explicó que su conducta como empleado en la empresa siempre había sido honrada y leal, y se negó a confesar lo que la policía calificó de “abuso de confianza”.

10. Según se informa, al Sr. Moubarak se le negó comida y agua durante 48 horas y se lo sometió repetidamente a interrogatorios durante tres días y dos noches bajo la custodia del Departamento de Investigación Criminal en la comisaría de Al-Shuwaij. En ningún momento se le permitió hacer una llamada telefónica, a pesar de que lo solicitó, y se le negó la posibilidad de entrevistarse en privado con su abogado. Solo se le permitieron llamadas telefónicas y visitas a partir del 9 de abril de 2018, después de haber pasado seis días en régimen de aislamiento e incomunicación. La fuente sostiene que esto es contrario al artículo 60 *bis* del Código de Procedimiento Penal, que establece que durante la detención policial se debe permitir que el acusado se ponga en contacto con su abogado y que informe de su paradero a otra persona.

c) Privación de libertad

11. La fuente informa de que el 5 de abril de 2018 el Sr. Moubarak fue trasladado a prisión, donde recibió un trato adecuado y humano, salvo en los días en que fue llevado a los tribunales.

12. La fuente informa de que al Sr. Moubarak le afeitaron la cabeza por la fuerza para que tuviera el aspecto de un delincuente común. Cada vez que lo sacaban de la prisión para llevarlo a una vista judicial, lo encadenaban a otros presos con grilletes en las muñecas y los tobillos, lo trasladaban al tribunal en un autobús sobrecargado y se le negaba el sustento durante todo el día.

13. La fuente relata que no se notificó al abogado del Sr. Moubarak de las comparencias de este ante el tribunal, excepto en una vista celebrada el 9 de mayo de 2018. En esa ocasión, no se permitió que el abogado se dirigiera al juez para solicitar la libertad bajo fianza. Sin embargo, sí se escucharon los argumentos de la fiscalía y del abogado de la empresa en contra de la libertad bajo fianza. No se permitió que el Sr. Moubarak se comunicase con su abogado en el tribunal, y al parecer no se permitieron las visitas consulares de diplomáticos canadienses y libaneses porque ello formaba parte de la “etapa de investigación”.

14. Según la fuente, una de las dos causas contra el Sr. Moubarak guarda relación con las alegaciones que la empresa hizo contra él. La fuente sostiene que la empresa estaba influyendo en las acciones de la policía y de los tribunales, si no dirigiéndolas. Añade que la empresa informó a la policía sobre el paradero del Sr. Moubarak para que pudiera detenerlo. Durante el segundo día en que el Sr. Moubarak estuvo en detención policial, el 4 de abril de 2018, un abogado contratado por la empresa se presentó en la comisaría con el fin de dar instrucciones a los agentes del Departamento de Instrucción Criminal que habían realizado la detención.

15. La fuente informa de que un segundo abogado que representaba a la empresa logró entrar en la prisión y pidió hablar con el Sr. Moubarak sin que su abogado estuviera presente, a lo que el Sr. Moubarak se negó. Además, ese segundo abogado también compareció con el fin de presentar alegatos contra la libertad bajo fianza. Se le permitió realizar dichos alegatos y estos prosperaron. Al parecer, el Sr. Moubarak vio a ese abogado reunirse con agentes de policía y compartir documentos relativos a la causa. El segundo abogado también se opuso con éxito a que el Sr. Moubarak y su abogado hablaran en privado.

16. Según la fuente, es evidente que la empresa, al tener un conflicto laboral pendiente con el Sr. Moubarak, tenía un conflicto de intereses en el caso y, sin embargo, las autoridades permitieron que la empresa desempeñase un papel privilegiado en el enjuiciamiento del Sr. Moubarak, incluida la comparencia ante el tribunal durante la audiencia para determinar la libertad bajo fianza. La fuente sostiene que la empresa tiene derecho a presentar una demanda por abuso de confianza en una acción civil con arreglo a la legislación kuwaití, pero no a hacer que sus desavenencias con el Sr. Moubarak se transformen en una acción penal entablada por el Estado. La fuente señala que al parecer la empresa formuló verbalmente la alegación de “abuso de confianza” a la policía el 3 de abril de 2018, y que al mismo tiempo la empresa presentó una demanda civil en la que alegaba que en 2012 el Sr. Moubarak, en su calidad de director jurídico, había firmado un contrato

en beneficio de una empresa extranjera en la que tenía un interés. Esta es una acusación que el Sr. Moubarak niega.

17. La segunda de las dos causas contra el Sr. Moubarak guarda relación con la posesión de alcohol y cánnabis, que el Departamento de Investigación Criminal halló en su domicilio el 3 de abril de 2018. Según la ley kuwaití, esa acción está tipificada como *yunha* o delito leve y para ella no procede la denegación de la libertad bajo fianza ni la imposición de prisión preventiva durante varios meses a una persona sin condenas previas.

d) Vistas judiciales

18. Según la fuente, los dos cargos contra el Sr. Moubarak se trataron por separado. La causa por abuso de confianza se llevó ante un juez el 24 de junio de 2018, y se decretó para el Sr. Moubarak libertad bajo fianza de 5.000 dinares kuwaitíes, a pesar de las objeciones del abogado de la empresa. No obstante, ello no redundó en su puesta en libertad, ya que siguió preso por el cargo de posesión de cánnabis, por el cual no se le concedió libertad bajo fianza hasta el 5 de julio de 2018. La fuente añade que, en el momento de su salida de la prisión, el Sr. Moubarak había estado detenido arbitrariamente durante 93 días.

19. La fuente informa de que la siguiente vista sobre el caso de abuso de confianza se programó para el 22 de julio de 2018. Se trataba de una audiencia preliminar de tipo procedimental y formal, a la que el Sr. Moubarak no tenía obligación de asistir. Los abogados de ambas partes —del Sr. Moubarak y de la empresa— presentaron documentación y solicitudes de divulgación. A fin de preparar la defensa del Sr. Moubarak, en particular frente a una compleja alegación de que había desviado dinero a través de una empresa extranjera, sus abogados intentaron obtener acceso a su computadora portátil y a los documentos personales incautados por la policía, así como a los documentos del expediente de la fiscalía, que no habían sido entregados a la defensa. También solicitaron que se pusiera a disposición, para su contrainterrogatorio durante el juicio, a un agente de policía que había afirmado que el Sr. Moubarak había admitido de inmediato la comisión del delito. También solicitaron permiso para que un experto forense examinase las computadoras portátiles y los teléfonos móviles del acusado.

20. La fuente informa de que la audiencia comenzó a las 10.30 horas del 22 de julio de 2018 y duró solo 45 minutos, ya que la defensa hizo sus solicitudes y la fiscalía también formuló varias, además de presentar algunas pruebas nuevas. Ninguna de las dos partes había pensado que en esa audiencia se conocería el fondo de la causa. No se convocó a los abogados del Sr. Moubarak para que montasen una defensa y no lo hicieron. El juez se retiró por un corto período de tiempo, lo que dio la impresión de que iba a dictaminar sobre las solicitudes provisionales. Regresó con un veredicto de culpabilidad y condenó al Sr. Moubarak a la pena máxima de dos años de prisión, con trabajos forzados, por abuso de confianza. El juez dijo que la sentencia debía ejecutarse de inmediato, sin libertad bajo fianza, en espera de la apelación. A este respecto, el juez se refirió, al parecer, a una decisión del Tribunal de Casación que, según él, había sentado un precedente por el que un tribunal de primera instancia podía proceder a emitir una condena sin obligación de examinar los argumentos de la defensa si el juez quedaba satisfecho con los argumentos de la fiscalía.

21. Según la fuente, la audiencia no cumplió los criterios de un juicio imparcial que se disponen en los artículos 9 y 14 del Pacto. La fuente afirma que el hecho de que el Sr. Moubarak haya sido condenado a una pena de prisión por un delito grave en su ausencia y sin que sus abogados hayan tenido la oportunidad de presentar una defensa o de prepararla con el Sr. Moubarak, significa que la privación de libertad subsiguiente fue automáticamente arbitraria.

22. A este respecto, la fuente destaca que la legislación de Kuwait no dice nada sobre cómo debe proceder el juez una vez que se hace cargo de la investigación. Por lo que tiene entendido la fuente, no existen normas de procedimiento que obliguen al juez a escuchar a la defensa antes de la condena; sencillamente, es lo que se hace siempre, como cuestión evidente de imparcialidad. Independientemente de si el juez actuó o no en contra de las normas procesales kuwaitíes, no cabe duda de que vulneró las disposiciones del Pacto en relación con un juicio imparcial.

23. La fuente informa de que el Tribunal de Apelación examinó el recurso del Sr. Moubarak el 13 de agosto de 2018. Según se informa, el abogado de este trató de interrogar a los testigos de la acusación, incluidos su testigo experto y su oficial de investigación, y solicitó que se hicieran públicos los documentos pertinentes necesarios para establecer la inocencia del Sr. Moubarak. El Tribunal aplazó su sentencia hasta el 27 de agosto de 2018, fecha en la que confirmó la decisión de la instancia inferior.

24. La fuente añade que el 11 de diciembre de 2018 el Tribunal de Casación desestimó el recurso del Sr. Moubarak y confirmó la sentencia y la pena de dos años de prisión con trabajos forzados. Según la fuente, el Tribunal de Casación se negó a entrar en materia con respecto a los argumentos de los abogados del Sr. Moubarak, en particular las cuestiones relativas al juicio imparcial durante la audiencia en el tribunal de primera instancia. No se examinaron los argumentos de que no se había permitido que el Sr. Moubarak accediese a los documentos, interrogase al testigo de la policía, declarase en su propio nombre o llamase a testigos y presentase documentos para establecer su inocencia. El Tribunal se limitó a aplicar una norma según la cual, puesto que el Sr. Moubarak no había comparecido el día de la audiencia, no cabía escuchar su impugnación del veredicto.

25. En relación con la segunda causa, relativa a los dos cigarrillos con contenido de cánnabis que se habían encontrado en el apartamento del Sr. Moubarak, la sentencia se dictó el 6 de diciembre de 2018 y el Sr. Moubarak fue condenado a cuatro años de prisión. La fuente añade que los dos cigarrillos se hallaron en un lugar que el Sr. Moubarak no ocupaba desde hacía cuatro meses, y que un análisis de sangre realizado en el momento de su detención dio negativo en estupefacientes y alcohol. Aunque no se presentaron como prueba las bebidas alcohólicas que supuestamente se encontraron en el piso, la pequeña cantidad de cánnabis (4,6 gr) sí se presentó.

26. La fuente añade que la pena habitual para esta clase de delitos, cuando no hay indicios de tráfico y el acusado tiene buena reputación, es una orden de servicio a la comunidad o una multa. La fuente sostiene que una pena de cuatro años de prisión es desproporcionada con respecto al delito en sí, lo que significa que la posterior privación de libertad fue arbitraria. No había pruebas de que el cánnabis fuera del Sr. Moubarak y había pruebas de que este no era un consumidor reciente de estupefacientes. La fuente llega a la conclusión de que la decisión no estaba fundamentada y era desproporcionada teniendo en cuenta la pequeña cantidad de que se trataba y la sentencia habitual impuesta en casos similares.

27. Según la fuente, en septiembre de 2019 el Sr. Moubarak logró salir de Kuwait y se le permitió entrar en otro país, aunque todavía pesan sobre él las penas de prisión en Kuwait y este país puede presentar una solicitud de extradición. La fuente afirma que Kuwait ya ha solicitado la detención del Sr. Moubarak por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal y ha iniciado nuevas causas penales en su contra.

e) Análisis jurídico

i) Consideraciones generales

28. La fuente sostiene que los hechos del presente caso constituyen violaciones de diversas disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular los artículos 7, 9, 10 y 11, y de los artículos 9 y 14 del Pacto. Estas infracciones son de suficiente gravedad para conferir carácter arbitrario a la privación de libertad del Sr. Moubarak. Además, se produjeron vulneraciones graves del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en particular los principios 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 (párr. 2), 17, 18 y 21.

29. La fuente sostiene que el principio de igualdad de medios procesales se ve menoscabado por el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, que permite que un tercero que se haya constituido en demandante civil, también llamado víctima, se convierta en “demandantes asociados”: a efectos prácticos, el demandante civil se convierte en parte de la investigación en apoyo del fiscal. La fuente añade que esto lleva a una falta de imparcialidad, ya que se permite que la empresa, que es parte interesada en el caso, inicie la investigación policial y luego se una a ella, que comparta información a la que el

Sr. Moubarak no se le permitió acceder y que se dirija al tribunal para discutir la solicitud de fianza del Sr. Moubarak, manipulando de ese modo el proceso penal.

30. La fuente añade que los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Penal, al permitir que los denunciantes pasen a formar parte de la acusación, son gravemente injustos. Añade también que, en la práctica, el Estado ha permitido que otros se hicieran con el control de su procedimiento penal a fin de promover una demanda civil, o al menos resolver un caso de despido improcedente en favor del empleador. La fuente señala que en el contrato de trabajo del Sr. Moubarak se establece claramente su relación con su empleador, incluida una disposición que establece todas las controversias deberían resolverse con arreglo a la legislación inglesa.

31. La fuente sostiene que la condena y el recurso del Sr. Moubarak equivalieron a una denegación evidente y flagrante de su derecho a un juicio imparcial. Se le negó de manera inequívoca la oportunidad de impugnar las pruebas de la fiscalía y de presentar su defensa. La fuente añade que también existía un claro problema con la igualdad de medios procesales entre el Sr. Moubarak y el demandante civil, que a efectos prácticos era el que llevaba el caso.

32. La fuente señala que el derecho a un juicio imparcial y sus componentes esenciales figuran en la Constitución de Kuwait, que garantiza la igualdad de trato ante la ley, la presunción de inocencia y la protección de las garantías necesarias para el ejercicio del derecho de defensa (arts. 29 y 34). Además, el Código de Procedimiento Penal refuerza esas disposiciones al conceder a la defensa derechos específicos para interrogar a los testigos de la acusación, convocar a sus propios testigos y hacer alegatos finales y comunicaciones relacionadas con la sentencia. Sin embargo, según la fuente, en el presente caso se incumplieron todas esas protecciones procesales.

33. La fuente también señala que las principales protecciones del derecho a un juicio imparcial en el derecho internacional están consagradas en el artículo 14, párrafos 1, 2 y 3, del Pacto, al que Kuwait se adhirió en 1996. A este respecto, la fuente sostiene que, si se niegan los elementos básicos del derecho a un juicio imparcial —como el derecho a impugnar la acusación y presentar una defensa, o el derecho a convocar e interrogar a testigos—, el hecho de que otros elementos del derecho sí se hayan respetado no es pertinente. Por lo tanto, el hecho de que el Sr. Moubarak tuviera un abogado que compareciera en su nombre no compensó en absoluto las graves violaciones del derecho a un juicio imparcial establecidas en este caso.

ii) En relación con los cargos de abuso de confianza

34. La fuente recuerda que se celebraron dos audiencias en el tribunal de primera instancia. En la primera audiencia, que se celebró el 24 de junio de 2018 y tuvo una duración muy breve, se presentó la acusación de abuso de confianza, el Sr. Moubarak la negó y el tribunal decidió sobre la libertad bajo fianza. Aparte de la fianza, no se trató ningún otro asunto en la primera audiencia y se aplazó la causa. La audiencia duró tres o cuatro minutos como máximo.

35. La fuente también señala que la ley de procedimiento penal de Kuwait establece una “etapa de investigación” sin plazo fijo, durante la cual la fiscalía no está obligada a mostrar a la defensa las pruebas que constan en su expediente y no se presume ningún derecho a la libertad bajo fianza. Además, en la legislación kuwaití no se contemplan las cauciones: el Sr. Moubarak no puede proponer avalistas ni depositar dinero como garantía de que se presentará en el juicio. Se trata de un grave defecto que hace que a la mayoría de los sospechosos se les deniegue la libertad bajo fianza durante la etapa de investigación.

36. La fuente añade que la única audiencia que podría equivaler a un juicio en el caso del Sr. Moubarak fue la segunda y última audiencia en el tribunal de primera instancia, el 22 de julio de 2018. Según la fuente, en aquel momento ya era obvio que la acusación de abuso de confianza era seria y compleja. Dado que la fiscalía no había presentado las pruebas en las que pretendía apoyarse para condenar al Sr. Moubarak, se preveía que se trataría a todos los efectos de una audiencia preliminar en la que se emitirían instrucciones procesales. El Sr. Moubarak no estaba obligado a asistir, así que no lo hizo.

37. La fuente informa de que en esa audiencia se presentaron dos abogados en nombre de la empresa, que a efectos prácticos se hicieron cargo de la acusación. Fueron ellos, y no el fiscal, los que tomaron la palabra contra el Sr. Moubarak, pidiendo al tribunal que lo condenara con “un veredicto sumamente severo”. Los abogados presentaron sendas carpetas con pruebas contra el Sr. Moubarak. Según se informa, estas pruebas, que comprendían cientos de páginas de documentos que la defensa no había visto, fueron las que el tribunal utilizó para condenar al Sr. Moubarak.

38. Según la fuente, los abogados del Sr. Moubarak hicieron entonces presentaciones, que fueron meras solicitudes procesales hechas con el fin de que los abogados pudieran impugnar el caso de la fiscalía y presentar la defensa del Sr. Moubarak. Pidieron que se llamara a los principales testigos de la acusación para el contrainterrogatorio, que se divulgaran las pruebas en que se basaba la acusación para demostrar la culpabilidad del Sr. Moubarak y que también se divulgaran las pruebas de descargo en poder del demandante. También dijeron que necesitaban que se les diera la posibilidad de examinar las pruebas que se les acababan de entregar.

39. La fuente añade que, con eso, la audiencia terminó. No se había llamado a ningún testigo, no se había dictado ninguna decisión sobre las solicitudes de la defensa y no se había dado la posibilidad de impugnar el testimonio de la fiscalía ni de plantear objeciones a los documentos en los que se basaba. El juez continuó escuchando los otros casos de su lista y luego abandonó el tribunal. Poco después, el juez emitió una lista anotada de todas las causas que había tratado ese día, en la que junto a cada una de las causas figuraba el resultado de las actuaciones del día. En la causa del Sr. Moubarak, el resultado era que se le condenaba a dos años de prisión con trabajos forzados, con efecto inmediato.

40. Según la fuente, el juez emitió más tarde una sentencia por escrito. Esta no hacía mención del hecho de que se había negado al Sr. Moubarak su derecho a impugnar el caso de la fiscalía y a montar su defensa. En cuanto a las solicitudes de la defensa presentadas durante la audiencia, el juez se limitó a decir que el abogado del acusado había presentado varias solicitudes que el tribunal había examinado detenidamente y tomado en consideración. Sin embargo, el juez no intentó explicar por qué había decidido condenar al Sr. Moubarak e imponerle una pena sin proceder a un juicio sobre el fondo del asunto.

41. La fuente señala que, al final de la sentencia escrita, el juez hizo constar que su fallo se había dictado en presencia de “ambos litigantes”. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, el Sr. Moubarak no tenía la obligación de comparecer ante el tribunal el 22 de julio de 2018 y no lo hizo, aunque sí estuvo representado por un abogado.

42. La fuente informa de que ante el Tribunal de Apelación los abogados del Sr. Moubarak impugnaron la condena alegando la denegación de su derecho a un juicio imparcial y otros motivos, todos los cuales fueron rechazados. El Tribunal de Apelación se refirió al principio de que “el tribunal de primera instancia debe escuchar las declaraciones de los testigos y considerar todos los elementos presentados”. Sin embargo, el Tribunal de Apelación llegó a la conclusión de que el tribunal de primera instancia había deliberado sobre el caso “con el detenimiento y la reflexión debidos”. El Tribunal de Apelación sostuvo que la condena estaba justificada, ya que el Sr. Moubarak había admitido el delito. Sin embargo, el propio tribunal había reconocido previamente que el Sr. Moubarak había negado esa acusación.

43. Según la fuente, el 11 de diciembre de 2018 el Tribunal de Casación desestimó la solicitud del Sr. Moubarak sin examinar el fondo, porque el Sr. Moubarak no había estado presente en la audiencia.

44. La fuente sostiene que el expediente del caso pone de manifiesto una negación flagrante del derecho del Sr. Moubarak a un juicio imparcial en el derecho nacional e internacional. La fuente añade que el rechazo arbitrario de las solicitudes de la defensa y la decisión de proceder a dictar una condena y una pena privaron al Sr. Moubarak de la presunción de inocencia y le impidieron examinar e impugnar el caso contra él.

45. La fuente sostiene además que, además de violarse el derecho del Sr. Moubarak a un juicio imparcial, se ignoró sistemáticamente su derecho a no ser privado ilegalmente de su libertad. De hecho, pueden demostrarse claras violaciones de las disposiciones del Código

de Procedimiento Penal, que se enumeran a continuación: que el investigador ordenase el arresto del Sr. Moubarak sin pruebas sólidas (art. 62); que no se presentaran motivos por escrito de la detención del Sr. Moubarak (art. 74 *bis*); que la policía no elaborara una relación de los objetos incautados en el registro del apartamento del Sr. Moubarak (art. 91); que no se le proporcionara una copia del atestado del registro (art. 91); que se le denegara su derecho de acceder a un abogado en privado en la comisaría de policía (art. 74 *bis*); que el investigador no aportara motivos para mantener al Sr. Moubarak en prisión preventiva (art. 74 *bis*); que se incumpliera el límite de diez días de detención en los casos de delitos leves (art. 69); que se denegara al Sr. Moubarak la posibilidad de hablar en privado con sus abogados en las audiencias ante el juez (art. 74 *bis*); que no fuera puesto en libertad antes de que expirase la prórroga de 10 días de su prisión (art. 69); que no fuera puesto en libertad antes de que expirase la prórroga de 30 días de su prisión (art. 70); que la prisión preventiva no se limitase al período necesario para los fines de la investigación (arts. 69 y 70); que no se escuchase a testigos y peritos ni se examinasen las pruebas tras una declaración de inocencia (arts. 162 a 171); y que no se examinasen las presentaciones sobre la pena antes de dictar sentencia (art. 172).

iii) En relación con los cargos relativos a estupefacientes

46. La fuente recuerda que se realizaron actuaciones separadas pero conexas contra el Sr. Moubarak por posesión de una cantidad muy pequeña de cánnabis (menos de 5 gramos), en los que se produjeron otras claras violaciones de su derecho a un juicio imparcial. El 6 de diciembre de 2018, el Sr. Moubarak fue condenado a cuatro años de prisión por este delito, una pena enormemente desproporcionada según los estándares kuwaitíes.

47. En relación con la sentencia impuesta por el tribunal, la fuente indica que la condena del Sr. Moubarak se basó en el testimonio de un agente de policía ante el cual supuestamente aquel había admitido la posesión, aunque no se divulgó la declaración propiamente dicha. El Sr. Moubarak negó esa admisión de culpa y en la sentencia se confirmó que, tan pronto como pudo obtener un abogado, negó específicamente la acusación. Su defensa fue que hacía cuatro meses que no se encontraba en el recinto en el que se habían encontrado los cigarrillos y que los análisis de drogas realizados en el momento de su detención, que fue el mismo día que regresó a Kuwait, no mostraron ningún rastro de estupefacientes.

48. La fuente añade que, al rechazar la defensa del Sr. Moubarak, el tribunal se basó en una declaración no corroborada de un agente de policía que no había sido registrada independientemente en ese momento, e ignoró las pruebas que apoyaban la defensa del Sr. Moubarak, que desestimó como “un intento de eludir el castigo”. En otras palabras, el tribunal no aplicó el principio de la carga de la prueba y se basó únicamente en la declaración de la policía. La fuente sostiene que se trató de una condena injusta y que se hizo caso omiso del principio de igualdad de medios judiciales y de la necesidad de considerar con imparcialidad el caso de la defensa, y que la situación se vio agravada por una condena desproporcionada.

*Respuesta del Gobierno*

49. El 22 de febrero de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que le facilitara, antes del 23 de abril de 2019, información detallada sobre la situación actual del Sr. Moubarak, así como sus observaciones sobre las alegaciones de la fuente. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental del Sr. Moubarak.

50. El 25 de febrero de 2019, el Gobierno solicitó una prórroga del plazo para presentar su respuesta. De conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo concedió una prórroga de un mes para que el Gobierno enviara su respuesta a más tardar el 23 de mayo de 2019. El Gobierno remitió su respuesta a la comunicación ordinaria los días 16 y 21 de mayo de 2019.



51. El Gobierno afirma que Kuwait es un Estado líder en la región en lo que respecta a la libertad de expresión, diversas libertades y la separación e independencia de los poderes, que comprenden el poder judicial, un parlamento elegido en elecciones y medios de comunicación libres, lo que pone de relieve la situación de los derechos humanos en el país. Las normas de derechos humanos se reflejan en la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de los Centros Penitenciarios (Ley núm. 26 de 1962) y otras leyes, que son aplicadas por el poder judicial, integrado por los tribunales penales y la fiscalía. En particular, el Gobierno subraya que el artículo 34 de la Constitución establece el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad en un tribunal, así como el derecho de defensa.

52. El Gobierno considera que la acusación y el juicio por posesión de estupefacientes y abuso de confianza no se pueden disfrazar como cuestiones de derechos humanos. El Gobierno se refiere a las aparentes contradicciones en las alegaciones de la fuente, entre ellas las siguientes: la acogida que la empresa dio al Sr. Moubarak a su regreso a Kuwait el 3 de abril de 2018 tras su anterior despido en diciembre de 2017; la negación de la posesión de drogas seguida de una declaración en el sentido de que el cargo relacionado con los estupefacientes solo constituye un delito leve; la presunta denegación de alimentos y agua durante 48 horas, lo que se contradice con la ley vigente, con el hecho de que su salud no se resintió por esa privación y con el hecho de que por lo demás recibiera un trato humano mientras estuvo privado de libertad; y la supuesta influencia de la empresa en la acusación y su participación en la investigación y el proceso, que el Gobierno considera una conjetura inverosímil.

53. El Gobierno informa de que la empresa denunció el robo por parte del Sr. Moubarak de cuatro dispositivos de almacenamiento electrónico (discos duros) y una computadora portátil de sus oficinas. El incidente se remitió al tribunal de primera instancia y se programó una audiencia. El Departamento de Investigación Criminal de la provincia de Al-Asimah detuvo al Sr. Moubarak el 3 de abril de 2018 en relación con dos casos distintos de delitos leves —abuso de confianza y robo—, tras obtener la autorización necesaria de la fiscalía. El Sr. Moubarak admitió su responsabilidad por el primer incidente y la negó para el segundo, y reveló la ubicación de los objetos robados. Los oficiales que registraron su residencia encontraron bebidas alcohólicas y dos cigarrillos sospechosos de contener sustancias estupefacientes.

54. El Gobierno añade que los artículos confiscados al Sr. Moubarak se depositaron en la Oficina de Investigación de la comisaría de Al-Shuwaij y que su abogado no los recogió cuando se le invitó a hacerlo. El nuevo abogado del Sr. Moubarak acudió más tarde a recoger dichos objetos y también se le pidió que recogiera el documento de viaje libanés del Sr. Moubarak en el Departamento de Investigación Criminal de Al-Asimah, pero no lo hizo.

55. Según el Gobierno, el Sr. Moubarak se enfrentaba a dos cargos. El primero era de abuso de confianza. El tribunal de primera instancia, en presencia del Sr. Moubarak, lo condenó a dos años de prisión con trabajos forzados y ordenó que después de cumplir condena fuese expulsado del país. El Sr. Moubarak fue puesto en libertad oficialmente el 27 de junio de 2018 bajo fianza de 5.000 dinares kuwaitíes y se le prohibió viajar hasta que se dictara una sentencia de segunda instancia. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia y el Tribunal de Casación rechazó la solicitud.

56. El segundo cargo era el de posesión o adquisición de sustancias estupefacientes con fines de consumo. El Sr. Moubarak fue puesto en libertad bajo fianza de 500 dinares kuwaitíes. El tribunal de primera instancia lo condenó, en rebeldía, a cuatro años de prisión con trabajos forzados y a una multa de 1.000 dinares kuwaitíes, y ordenó la confiscación de los bienes incautados, así como su expulsión del país una vez hubiese cumplido su condena. El Tribunal de Apelación dictaminó que el recurso presentado por la fiscalía debía suspenderse hasta que venciese la fecha de oposición al mismo, o hasta que se determinase, proclamase y venciese la fecha de apelación.

57. El Gobierno afirma que el Sr. Moubarak salió ilegalmente de Kuwait mientras estaba pendiente el recurso contra su sentencia y su pena.

58. El Gobierno también afirma que el artículo 5 de la Ley de Centros Penitenciarios exige que todas las prisiones mantengan registros de las quejas y solicitudes de los reclusos, pero que el Sr. Moubarak no había presentado ninguna queja. Se le dio un trato adecuado y humano durante todo su período de reclusión.

59. Según el Gobierno, al Sr. Moubarak le afeitaron la cabeza por motivos de salud y seguridad, lo que está autorizado en virtud del artículo 20 del Decreto núm. 25 de 1979 relativo al reglamento interno de prisiones. Se utilizan autobuses seguros y con aire acondicionado para transportar a los reclusos a lugares en el exterior de la prisión.

60. Para demostrar que se había respetado el derecho del Sr. Moubarak a recibir visitas, el Ministerio del Interior emitió un cuadro de registro en el que se consignaban las visitas realizadas periódicamente al Sr. Moubarak entre el 9 de abril de 2018 y el 3 de julio de 2018 por parte de representantes de la embajada del Canadá, de su abogado, de su familia y amigos, y de representantes de la Iglesia anglicana.

61. El Gobierno también señala que, en caso de actos abusivos e ilícitos cometidos por un miembro de la policía, cualquier persona puede presentar una denuncia ante la División de Denuncias del Departamento General de Supervisión e Inspección. Se realizan las investigaciones necesarias y, si se descubre una violación, se toman las medidas legales apropiadas. Según el Gobierno, el Sr. Moubarak no presentó denuncia alguna contra ningún miembro de la policía con respecto a las alegaciones y observaciones mencionadas.

62. La información adicional proporcionada por el Ministerio de Justicia y la fiscalía corrobora las presentaciones anteriores del Gobierno. En el caso de abuso de confianza, la empresa presentó una denuncia de que el Sr. Moubarak había realizado transferencias ilegales de fondos como pago por asesoramiento jurídico a otra empresa, de la que era propietario. En julio de 2018, el tribunal de primera instancia condenó al Sr. Moubarak a dos años de prisión con trabajos forzados y ordenó su expulsión del país una vez hubiese cumplido su condena. El Sr. Moubarak recurrió la sentencia y el Tribunal de Apelación suspendió la ejecución de la pena el 13 de agosto de 2018 en espera de la resolución del recurso, pero confirmó la sentencia el 27 de agosto de 2018. El Sr. Moubarak recurrió de nuevo, pero el recurso fue desestimado el 11 de diciembre de 2018 por incomparecencia del Sr. Moubarak.

63. El Ministerio también sostiene que las pruebas que dieron lugar a los cargos relacionados con estupefacientes fueron incautadas en el domicilio del Sr. Moubarak durante la ejecución de una orden, emitida por la fiscalía en el caso de abuso de confianza antes mencionado, con el fin de registrar su residencia en busca de computadoras y documentos relacionados con la transferencia de fondos de la empresa a su propia sociedad. El 6 de diciembre de 2018, el tribunal condenó al Sr. Moubarak, en rebeldía, a cuatro años de prisión con trabajos forzados y a una multa de 1.000 dinares kuwaitíes, y su expulsión del país una vez hubiese cumplido su condena. La fiscalía interpuso un recurso y, el 11 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelación decidió suspender la vista del recurso a la espera de que expirara la fecha de oposición al mismo, o hasta que se determinase, proclamase y venciese la fecha de apelación.

#### *Comentarios adicionales de la fuente*

64. El 17 de mayo de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente y le pidió que le proporcionara, a más tardar el 3 de junio de 2019, comentarios u observaciones a la respuesta del Gobierno. El 10 de junio de 2019, la fuente presentó nuevos comentarios sobre la respuesta del Gobierno.

65. La fuente rechaza la mayoría de los argumentos jurídicos y fácticos presentados por el Gobierno y comenta que el Sr. Moubarak sufrió un total de 93 días de detención arbitraria tras su arresto, ya que durante más de dos semanas no tuvo la oportunidad de impugnar su detención ante un juez y los jueces no dieron motivo alguno para privarlo de su libertad.

66. La fuente también recuerda las irregularidades encontradas en las actuaciones judiciales. Afirma que la condena de dos años de prisión que se impuso al Sr. Moubarak se emitió en un juicio y un recurso injustos, en los que no se le permitió comparecer y prestar

declaración, impugnar las pruebas en su contra procediendo a un contrainterrogatorio o llamando a sus propios testigos, o tener acceso a las pruebas del expediente de la acusación que estaban a disposición de los jueces.

67. La fuente también sostiene que la pena de cuatro años por los cargos relacionados con estupefacientes es arbitraria porque el tribunal de primera instancia lo condenó sin tener en cuenta las pruebas de su inocencia. El tribunal no permitió el contrainterrogatorio del único testigo en su contra, ni permitió que el Sr. Moubarak diera su propio testimonio o llamara a ningún testigo de la defensa. Además, la pena de cuatro años de prisión era totalmente desproporcionada con respecto al delito y no se ajustaba a las sentencias no privativas de libertad dictadas en casos similares.

68. La fuente opina que el Gobierno no ha respondido a la mayoría de las quejas, salvo mediante declaraciones generales sobre la legislación kuwaití. El Gobierno afirma que la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1997/50, excluía de la definición de “detención arbitraria” toda detención que fuese resultado de una decisión definitiva de un tribunal nacional. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta. Como explicó el Grupo de Trabajo en su folleto informativo núm. 26, la Comisión pasaba a afirmar en la resolución 1997/50 que se estimaba que no era arbitraria la privación de libertad cuando emanaba de una decisión adoptada por un tribunal nacional únicamente cuando dicha decisión se ajustara a: a) la legislación nacional; y b) las normas internacionales pertinentes enumeradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes adoptados por los Estados de que se tratase.

69. La fuente considera que las sentencias y penas impuestas al Sr. Moubarak fueron el resultado de juicios injustos e inconstitucionales en virtud del artículo 34 de la Constitución y que violaron la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto. El hecho de que su detención haya sido el resultado de un proceso legal no impide, por lo tanto, que sea arbitraria.

### Debate

70. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información suministrada en relación con la privación de libertad del Sr. Moubarak.

71. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68).

### Categoría I

72. El Grupo de Trabajo considerará en primer lugar si se han cometido vulneraciones comprendidas en la categoría I, que se refiere a la privación de libertad sin fundamento jurídico.

73. El Grupo de Trabajo recuerda que, según el artículo 9, párrafo 2, del Pacto, toda persona detenida no solo debe ser informada, en ese momento, de las razones de la detención, sino también notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella<sup>1</sup>. A pesar de las divergencias y la disparidad entre las versiones de los hechos proporcionadas por el Gobierno y por la fuente, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no ha fundamentado plenamente su refutación de la alegación de que al Sr. Moubarak no se le mostró una orden de detención ni se le informó de los motivos de la misma cuando esta se produjo. El Gobierno informa de que las autoridades estaban en posesión de una orden válida para registrar la residencia del Sr. Moubarak, dictada por un juez de instrucción en el caso de abuso de confianza. Sin embargo, el Gobierno no dice si al Sr. Moubarak se le mostró esta orden en algún momento del procedimiento. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que el registro y la incautación en la residencia del

<sup>1</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 42/2018.

Sr. Moubarak y su detención se llevaron a cabo sin que se le informara inmediatamente de su fundamento jurídico mediante la presentación de una orden judicial.

74. El Grupo de Trabajo considera que, para que sea posible establecer el fundamento jurídico de la privación de libertad del Sr. Moubarak, las autoridades deberían haberle comunicado los motivos de su detención en el momento en que esta se produjo y haberlo informado sin demora de los cargos formulados contra él<sup>2</sup>. Abstenerse de hacerlo supone una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9, párrafo 2, del Pacto, así como del principio 10 del Conjunto de Principios, y hace que su detención carezca de fundamento jurídico alguno. Según el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. En el presente caso, el Sr. Moubarak fue detenido sin que mediara orden de detención y en ese momento no se lo informó de los motivos de su detención, en contravención de lo dispuesto en el artículo 9, párrafos 1 y 2, del Pacto. Para que la privación de libertad tenga una base legal, no basta con que exista una ley que permita la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención y en cumplimiento de otros procedimientos, como la exposición de los motivos de la correspondiente detención y la notificación sin demora de los cargos.

75. La fuente sostiene además, y el Gobierno no lo ha rebatido de manera convincente, que el Sr. Moubarak estuvo detenido en régimen de incomunicación durante seis días, del 3 al 9 de abril de 2018, tras su detención. El registro de visitas del Sr. Moubarak, proporcionado por el Gobierno, no muestra visitas anteriores al 9 de abril de 2018, por lo que no contradice la afirmación de la fuente. Además, el Gobierno no prueba que se notificara a los familiares del Sr. Moubarak o al consulado del Canadá de su detención y posterior reclusión, ni presenta pruebas de que se le haya permitido el acceso a un abogado durante la primera etapa de su detención. Una privación de libertad de estas características, que entraña la negativa a revelar la suerte o el paradero de las personas afectadas y a reconocer su reclusión, carece de fundamento jurídico válido en cualquier circunstancia y es intrínsecamente arbitraria, ya que deja a la persona fuera del amparo de la ley, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 16 del Pacto.

76. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Moubarak no fue llevado ante un juez sin demora —es decir, en las 48 horas siguientes a la detención, salvo en circunstancias absolutamente excepcionales, de conformidad con la norma internacional<sup>3</sup>— y que tampoco se respetó su derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que este pudiera decidir a la mayor brevedad posible sobre la legalidad de su detención, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 9 de la Declaración Universal, los artículos 2, párrafo 3, y 9, párrafos 1, 3 y 4, del Pacto, y los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios. Además, en los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal se indica que el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo y su ausencia constituye una violación de los derechos humanos, y que este recurso judicial es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática (A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3). Se trata, de hecho, de una norma imperativa del derecho internacional, aplicable a todas las formas y situaciones de privación de libertad<sup>4</sup>.

77. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Moubarak del 3 al 9 de abril de 2018 carece de fundamento jurídico, por lo que es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

<sup>2</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 10/2015, párr. 34. Véase también la opinión núm. 46/2019, párr. 51.

<sup>3</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y seguridad personales, párr. 33, donde se cita *Kovsh c. Belarús* (CCPR/C/107/D/1787/2008), párrs. 7.3 a 7.5. Véanse también CCPR/C/SLV/CO/6, párr. 14; CCPR/CO/70/GAB, párr. 13; y CCPR/C/79/Add.89, párr. 17.

<sup>4</sup> Opinión núm. 39/2018, párr. 35.

## Categoría III

78. El Grupo de Trabajo examinará ahora si las presuntas violaciones del derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales son de una gravedad tal que confieren a la privación de libertad carácter arbitrario y por consiguiente quedan comprendidas en la categoría III.

79. El Grupo de Trabajo considera que la detención en régimen de incomunicación del Sr. Moubarak durante un período de seis días y la aparente denegación de alimentos y agua que sufrió durante 48 horas menoscabaron su capacidad de defenderse y obstaculizaron su ejercicio de las garantías procesales y el derecho a un juicio imparcial.

80. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que lo examine en mayor profundidad.

81. El Grupo de Trabajo observa que las autoridades no respetaron el derecho del Sr. Moubarak a recibir asistencia letrada en todo momento, que es inherente al derecho a la libertad y a la seguridad, ni su derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, según lo previsto en los artículos 3, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, párrafo 1, y 14, párrafo 1, del Pacto. Se le privó de su derecho a la asistencia letrada en la etapa crítica del procedimiento penal durante su interrogatorio, mientras se le mantuvo incomunicado y sin la presencia de sus abogados, lo que a efectos prácticos eliminó la protección procesal contra la tortura y los malos tratos, según informó la fuente. De hecho, la fuente informa de una intervención provisional del abogado de la empresa en ausencia del propio abogado del Sr. Moubarak durante este período, lo que demuestra el riesgo que plantea la detención en régimen de incomunicación para el derecho a la asistencia jurídica.

82. El Grupo de Trabajo también llega a la conclusión de que el Gobierno no cumplió la obligación que le incumbe en virtud del artículo 36, apartado b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la que es parte, de transmitir sin demora cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva. El Gobierno no ha ofrecido ninguna explicación por su negativa a prestar asistencia consular al Sr. Moubarak en el período crítico comprendido entre el 3 y el 9 de abril de 2018.

83. El Grupo de Trabajo recuerda que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa, y que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto.

84. El Grupo de Trabajo recuerda también que, como señaló el Comité de Derechos Humanos en su observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, el artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto establece el derecho a que se admita a testigos pertinentes para la defensa, y a tener la oportunidad de interrogar a los testigos de cargo e impugnar sus declaraciones en alguna etapa del proceso. La fuente alega que se desatendió la solicitud del Sr. Moubarak de que un experto prestara testimonio en el caso de abuso de confianza. El Gobierno, aun teniendo la oportunidad de hacerlo, no ha respondido directamente a estas alegaciones. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que también existen indicios razonables de que se han producido vulneraciones de los derechos que amparan al Sr. Moubarak en virtud del artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto.

85. En este caso, la fuente afirma que el juicio se llevó a cabo de manera expeditiva y sin dar oportunidad al abogado del Sr. Moubarak de presentar una defensa sobre el fondo del caso. Se informó de lo mismo con respecto a las audiencias en el Tribunal de Apelación y en el Tribunal de Casación. La fuente también informó de que el Sr. Moubarak no tenía conocimiento de que la audiencia del 22 de julio de 2018 versaría sobre el fondo y, por lo

tanto, no participó en ella, lo que posteriormente utilizó en su contra el Tribunal de Casación. En ambos casos, los abogados del Sr. Moubarak no pudieron presentar pruebas y testigos para la defensa de su cliente ni acceder al expediente de la acusación y contrainterrogar al testigo de la acusación. En su respuesta, el Gobierno declaró que los tribunales habían aplicado correctamente el artículo 34 de la Constitución de Kuwait, que garantiza la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. A falta de información concreta del Gobierno que demuestre que realmente se garantizó el derecho del Sr. Moubarak a un juicio imparcial, el Grupo de Trabajo concluye que la declaración de la fuente es creíble y que los hechos denunciados constituyen violaciones del derecho a un juicio imparcial en virtud del artículo 14, párrafo 3, del Pacto.

86. Finalmente, el Grupo de Trabajo ha considerado las alegaciones de la fuente de que durante el proceso contra el Sr. Moubarak se produjeron varias irregularidades probatorias, lo que afectó al principio de igualdad de medios procesales, invirtió la carga de la prueba e interfirió con la presunción de inocencia. El Grupo de Trabajo hace hincapié en que no ha examinado el contenido de las pruebas y solo ha considerado si se han respetado las normas internacionales de derechos humanos en este caso. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha observado que la fuente sostiene que en la causa de abuso de confianza, no se convocó a ningún testigo, ni por parte del tribunal de primera instancia —que al parecer no conoció la causa en cuanto al fondo—, ni del Tribunal de Apelación, ni del Tribunal de Casación. Según se informa, el procedimiento fue sumario y solo se permitió que presentara argumentos el demandante civil. Además, en la causa relacionada con los cargos de estupefacientes, los argumentos de la fiscalía se basaron al parecer únicamente en el testimonio de la policía. El Grupo de Trabajo no se coloca en la posición de un tribunal nacional u órgano de apelación, y no evalúa la suficiencia de las pruebas en el juicio<sup>5</sup>. El Grupo de Trabajo considera que las presuntas irregularidades probatorias mencionadas por la fuente fueron asuntos de los tribunales nacionales, pero que, en la causa de abuso de confianza, no parece que se hayan planteado y examinado plenamente en el juicio y la apelación. Por consiguiente, sobre la base de toda la información presentada por las partes, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que se ha producido una violación de las normas internacionales de derechos humanos y, en particular, del artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

87. Estas violaciones combinadas son tan considerables que constituyen violaciones efectivas del derecho a un juicio imparcial. Por consiguiente, la detención del Sr. Moubarak fue arbitraria con arreglo a la categoría III, y cualquier otra privación de libertad basada en estos procedimientos también sería arbitraria.

88. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que estas violaciones del derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales son de una gravedad tal que confieren a la privación de libertad del Sr. Moubarak carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

### **Decisión**

89. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Waleed Antoine Moubarak es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, 9, párrafos 1, 2, 3 y 4, 14, párrafos 1, 2 y 3, y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

90. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Kuwait que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Moubarak sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

<sup>5</sup> Opiniones núm. 57/2016, párr. 115, y núm. 10/2000, párr. 9.

91. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder al Sr. Moubarak el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

92. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Moubarak y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

93. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tome las medidas pertinentes.

94. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión a través de todos los medios disponibles y de la forma más amplia posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

95. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si el Sr. Moubarak sigue en libertad;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Moubarak;
- c) Si se ha realizado una investigación sobre la violación de los derechos del Sr. Moubarak y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Kuwait con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

96. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

97. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

98. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>6</sup>.

*[Aprobada el 22 de noviembre de 2019]*

---

<sup>6</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.